



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

ORDINARIO No. 2019-410-01

ASUNTO: **CONSULTA SENTENCIA**

DEMANDANTE: **HERMINIA DOLORES ACUÑA FRUTO**

DEMANDADO: **COLPENSIONES**

S E N T E N C I A

En Barranquilla, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), se procede a resolver el grado jurisdiccional de consulta ordenado por la Juez Cuarta Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla y previsto en el artículo 69 del CPL y de la SS, al resultar la sentencia proferida el día 11 de junio de 2020, adversa a las pretensiones de la parte actora.

1

Así las cosas, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, con fundamento en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda, como a continuación sigue.

P R E T E N S I O N E S

La parte demandante, actuando mediante apoderado judicial, entabló demanda ordinaria laboral contra de Colpensiones, con el fin de que previos los trámites de un proceso ordinario laboral de única instancia se condene a la demandada al reconocimiento y pago del incremento pensional del 14%, previsto en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, el retroactivo a que haya lugar, intereses moratorios, los derechos que resulten probados en virtud de las facultades ultra y extra petita y costas del proceso.



HECHOS

Como fundamentos fácticos relevantes de las pretensiones afirma la parte demandante que fue pensionada por invalidez mediante resolución GNR 302784 de 13 de octubre de 2016; que tiene a su cargo y bajo su dependencia económica a su compañero permanente; que elevó reclamación administrativa a la demandada el 30 de mayo de 2019, pero que la entidad de seguridad social dio respuesta negativa el 07 de junio del mismo año.

CONTESTACION DE LA DEMANDA

La demandada mediante apoderado judicial en audiencia pública dio contestación a la demanda, manifestó oposición a la prosperidad de las pretensiones y formuló excepciones de mérito.

DECISION DE PRIMERA INSTANCIA

2

Tramitado el proceso, la Juez Cuarta Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, profirió sentencia por la que decidió declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación, absolvió a la demandada, impuso costas a la parte actora y ordenó el grado jurisdiccional de consulta.

CONSULTA

Efectuado el reparto del proceso, correspondió a este Despacho su conocimiento, en grado jurisdiccional de consulta, de conformidad con lo estipulado en el artículo 69 del CPL y de la SS; admitido y surtido el traslado conforme a las actuales disposiciones por auto de fecha 28 de octubre de 2020, se procede a resolver el siguiente

PROBLEMA JURÍDICO



Teniendo en cuenta la demanda, contestación y fijación del litigio, el problema jurídico radica en determinar si a la parte demandante, le asiste el derecho al reconocimiento del incremento pensional por persona a cargo, previsto en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo año.

TESIS DEL DESPACHO

Encuentra el Despacho que la sentencia consultada deberá ser confirmada, con fundamento en las siguientes motivaciones y consideraciones fácticas, jurídicas y jurisprudenciales.

CONSIDERACIONES

1. HECHOS RELEVANTES PROBADOS O PREMISAS FÁCTICAS:

Se encuentra fuera de discusión, toda vez que fue suficientemente probado con la evidencia documental aportada por ambas partes procesales, las siguientes premisas fácticas relevantes para la definición del asunto:

3

Conforme a la Resolución GNR 302784, a favor de la parte demandante le fue reconocida pensión de invalidez en cumplimiento de fallo judicial; no obstante, no existe prueba que indique de manera certera al Juzgado que la pensión fue reconocida bajo las prescripciones o parámetros del Decreto 758 de 1990.

Ahora bien, para probar la dependencia económica y el agotamiento de la reclamación administrativa, la parte actora aportó documental referida al escrito elevado a la demandada y su correspondiente decisión en sentido negativo, de fecha 30 de mayo y 07 de junio de 2019, copia del documento de identidad y registro civil de nacimiento del compañero permanente y de la demandante y declaraciones juradas extra proceso.

2. PREMISAS JURÍDICA DEL CASO:



Sea lo primero indicar que, con fundamento en los principios de igualdad y seguridad jurídica, desde el punto de vista de la predictibilidad de las decisiones, en el sub iudice, se procederán a efectuar las siguientes consideraciones, que coinciden con las que en asuntos similares esta operadora judicial ha venido efectuando, en tanto no existe premisa fáctica o jurídica que conlleve a justificar la variación del propio precedente o precedente horizontal.

Desde el acápite de tesis del Despacho se anunció la confirmación de la sentencia consultada ante falta de prosperidad de las pretensiones de la demanda, con independencia o no de la demostración o efectiva prueba del parentesco entre padres e hijos, de la unión marital de hecho o matrimonial y de la dependencia económica; en virtud de la inexistencia de causa legal de lo pretendido, veamos porqué.

La primera de las razones para la confirmación de la providencia, gira en torno al hecho de que la parte demandante no acreditó con precisión cuál fue el régimen legal que se tuvo en cuenta para el reconocimiento pensional; en consecuencia, si la premisa jurídica no fue el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758, única norma que consagraba los pretendidos incrementos pensionales por personas a cargo, sino otra diferente, como la Ley 100 de 1993, lo cierto es que ésta ni ninguna otra consagra en algunos de sus artículos, los referidos incrementos; luego entonces si el fundamento legal de la pensión de la parte demandante fue la Ley 100 de 1993, en su versión original o alguna de sus modificaciones, no le asiste derecho a la pretensión elevada, ante la inexistencia del derecho en el régimen pensional que cobijó su derecho.

Ahora bien, si el reconocimiento pensional en el caso del demandante encontró como fundamento legal el Decreto 758 de 1990, lo cierto es que, necesariamente, dada la fecha de reconocimiento, 07 de septiembre de 1999, tal normatividad debió ser aplicada en virtud del principio de la condición más beneficiosa y no de manera directa, lo que también impediría el despacho favorable de las pretensiones, pues en tratándose de incrementos pensionales previstos en el Decreto 758 de 1990, ha sido el criterio de esta unidad judicial, concederlos sólo si la pensión sobre la que se pretenden se reconoció en vigencia directa del Decreto 758.

4



Lo anterior por cuanto, en armonía con los precedentes jurisprudenciales, los pretendidos incrementos pensionales, fueron derogados por el Sistema General de Seguridad Social Integral, esto es la Ley 100 de 1993.

En garantía de los principios de legalidad y seguridad jurídica, coincide este Juzgado con el nuevo criterio de la Corte Constitucional anunciado en sentencia de tutela que se citará más adelante, y en consecuencia se recogen pronunciamientos pasados y contrarios al aquí expuesto en casos similares; nuevo criterio que enseña que para ser beneficiario y pregonar la titularidad del presunto derecho a acrecentar o incrementar la pensión por cónyuge o hijo a cargo, en los términos del derogado acuerdo 049 y decreto 758 de 1990, es necesario que la pensión se haya consolidado en vigencia directa y plena de éstos, como ya se dijo.

No desconoce este Juzgado que la jurisdicción constitucional se pronunció en sentencia de unificación 310 de 2017, mediante la cual se estableció que los incrementos pensionales del 14 y 7 % hacen parte de la pensión; no obstante tal sentencia fue declarada nula por la propia Corporación, mediante auto 320 del 3 de mayo de 2018; y posteriormente en sentencia SU 140 de 2019, contrariamente señaló que tales incrementos no hacen parte de la pensión; que salvo que se trate de derechos adquiridos antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el derecho a los incrementos pensionales que previó el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 desapareció del ordenamiento jurídico por virtud de su derogatoria orgánica; que en todo caso son inconstitucionales al contrariar el artículo 48 de la Carta que consagra la obligación de que toda pensión sea liquidada de conformidad con lo efectivamente cotizado, norma constitucional que se trasgrede de aceptarse el reconocimiento y pago de los mencionados aumentos pensionales, pues el hecho del matrimonio o convivencia y dependencia de hijo no origina cotización alguna.

Igualmente, el Alto Tribunal Constitucional enseñó que la sostenibilidad fiscal que consagra el artículo 334 de la Carta se erige como un criterio jurídico general y orientador en tanto se refiere a las pautas que deben guiar al Estado en desarrollo de su función de director general de la economía nacional, de manera tal que se cuente con la efectiva posibilidad de cumplir con los cometidos estatales; que la sostenibilidad financiera del sistema pensional, más allá de un principio, es una norma jurídica que establece en cabeza del operador judicial un mandato



hermenéutico encaminado a lograr una relación de medio a fin entre esta última sostenibilidad y los propósitos de universalidad, solidaridad e integridad que rigen el sistema de la seguridad social.

3. De las pretensiones accesorias:

Ahora bien, teniendo en cuenta la suerte de la pretensión principal, esto es, la negativa a ordenar el reconocimiento del incremento pensional, igual suerte corre las demás pretensiones de la demanda.

4. De las costas procesales:

Sin costas en este grado de jurisdicción.

5. Apoyo jurisprudencial aplicable al caso

Con relación a la derogatoria de los incrementos pensionales consúltese la sentencia SU 140 de 2019 de la Corte Constitucional.

6. De la notificación de la sentencia:

Finalmente, teniendo en cuenta que el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 ordena proferir sentencia escrita para surtir el grado jurisdiccional de consulta en materia laboral, pero no dispuso la forma de notificación de la providencia, se ordenará a la Secretaría notificarla por estado, de conformidad con el artículo 295 del CGP, aplicable por analogía al rito laboral, que en lo pertinente enseña:

“Las notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplirán por medio de anotación en estados que elaborará el Secretario.”



En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia consultada, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: COSTAS. Sin costas en este grado de jurisdicción.

TERCERO: Previa las desanotaciones del caso, por Secretaría devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión en la forma prevista en el artículo 295 del CGP.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELA MARÍA RAMOS SÁNCHEZ
JUEZA SEXTA LABORAL DEL CIRCUITO BARRANQUILLA



7